



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, octubre 20 de 2022

Radicado: 05001-31-05-**012-2017-01148-01**
Demandante: RUBIELA BUITRAGO JARAMILLO
Demandado: PROTECCIÓN S.A.
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YÉPES GARCÍA y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite de forma escrita en virtud del artículo 13 de la ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Pretende la demandante que se declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada con ocasión al fallecimiento de su hija Paula Marín Buitrago a partir del 9 de octubre de 2016; al pago de intereses de mora, lo ultra y extra petita probado y las costas del proceso.

Para sustentar sus pretensiones indicó que su hija PAULA MARÍN BUITRAGO falleció el 9 de octubre de 2016, momento para el cual se encontraba afiliada en pensiones a PROTECCIÓN S.A. y en donde cotizaba como independiente, y

acredita entre noviembre de 2000 y septiembre de 2016 308.43 semanas; que en vida estuvo casada con el señor JAVIER ARTURO VALENCIA, de quien se divorció desde el 9 de septiembre de 2011, que no procreo hijos y desde su separación vivía con los padres; finalmente indicó que en calidad de padres se presentaron ante PROTECCIÓN a reclamar pensión de sobreviviente, misma que les fue negado por la entidad, argumentando que no acreditaron la dependencia económica de su hija.

El a quo, tras valorar la prueba testimonial, encontró acreditada la dependencia económica de la señora RUBIELA BUITRAGO JARAMILLO, respecto de su hija PAULA MARÍN BUITRAGO y condenó a PROTECCIÓN a reconocer pensión de sobreviviente en cuantía del salario mínimo con 13 mesadas a partir del 0 de octubre de 2016 e intereses moratorios,

Determinación esta que fue materia de apelación por PROTECCIÓN, quien solicitó sea revocada la decisión, indicando que la demandante tenía la carga de la prueba y, por lo tanto, le correspondía demostrar que dependía económicamente de su hija. Considera que con los testigos y el interrogatorio de parte de la actora se corrobora la no dependiente económica con respecto a su hija en los términos que señala la norma y jurisprudencia. Adicionalmente, indicó que quedó demostrado con la prueba documental obrante en el expediente, que la señora Paula Marín cotizaba por 1 SMMLV, que trabajó como independiente haciendo accesorios, que sufría de bipolaridad desde los 19 años, que durante el último mes estuvo hospitalizada, que falleció en septiembre de 2016, con respecto al señor ÓSCAR, padre de la causante, quedó demostrado que residía en casa propia que recibía dos pensiones, 1 por parte de la FIDUPREVISORA de valor de 2.945.047 y pensión por parte del FOPEP por valor de 2.716.047 para un total de mesada pensional de 5.661.094 pesos. Que el señor Óscar manifestó en el formulario que no dependía económicamente de su hija, que hacía parte del régimen exceptuado del magisterio y que asumía los gastos del hogar. Que la

señora Rubiela siempre fue ama de casa, que se casó en 1977, que estaba afiliada como beneficiaria de su esposo, que el ingreso del hogar lo aportaba el señor Óscar, que la señora Paula ingresaba 350.000, es decir, solo el 7%, razón por la cual considera que no se logra demostrar la dependencia exigida.

ALEGATOS

Dentro del término de traslado que establece el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, las partes presentaron alegatos, ratificándose en los argumentos de defensa de las pretensiones y oposición.

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

Sea lo primero indicar que en este caso se encuentran por fuera de discusión que: **1)** que la señora Paula Marín Buitrago falleció el 8 de octubre de 2016 (pág. 18). **2)** que nació el 12 de julio de 1979 y era hija de Rubiela Buitrago Jaramillo y Óscar Alberto Marín Velázquez (pág.20). **3)** que según anotaciones del registro civil, la señora Paula Marín contrajo matrimonio el 22 de marzo de 2003 y se divorció el 9 de septiembre de 2011 (pág.21). **4)** que la señora Paula Marín Buitrago cotizó en protección durante toda su vida laboral un total de 308,43 semanas (pág. 33 a 37). **5)** que Protección negó el reconocimiento de la prestación reclamando, aduciendo que no se constató la dependencia de los reclamantes (pág. 38 a 40).

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que no se discute si la causante dejó acreditados los requisitos para que sus beneficiarios fueran acreedores de la pensión de sobreviviente, le corresponde a esta Corporación determinar si la demandante dependía económicamente de su hija fallecida, Paula Marín Buitrago, a efectos de determinar si tiene derecho o no a la pensión de sobrevivientes, intereses de mora del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas del proceso.

Pues bien, como la fecha del fallecimiento de Paula Marín Buitrago fue el 8 de octubre de 2016, corresponde aplicar los artículos 46, 47, 73 y 74 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, disposiciones que regulan los requisitos para que proceda el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los padres de un afiliado al sistema de seguridad social, así: (i) que no hubiese cónyuge o compañera permanente supérstite ni hijos y (ii) que dependan económicamente del causante.

Teniendo en cuenta que la dependencia económica de la madre respecto de su hija fallecida es lo que se discute al interior de este proceso, sobre la hermenéutica de esta norma, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral ha sido consistente y enfático en adocinar que la condición de la dependencia económica de los padres respecto del hijo causante de la pensión de sobrevivientes, no exige que tal condición sea total y absoluta, y que la misma, se debe analizar en cada caso particular y concreto, para que así el juzgador pueda estar en la capacidad de establecer si los ingresos que reciben los progenitores tiene la virtualidad de hacerlos autosuficientes desde el punto de vista económico, al permitirles la satisfacción de sus necesidades manteniendo su subsistencia en condiciones dignas, advirtiendo que no significa que cualquier estipendio que se les otorgue a los familiares pueda ser tenido como prueba determinante para ser beneficiario de la pensión, pues esa no es la finalidad prevista en el sistema de seguridad social, cuyo propósito, es servir de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas.

Así, la dependencia económica tiene como rasgo fundamental el hecho que, una vez fallecido el causante y, por lo mismo, extinguida la relación de contribución económica hacia el presunto beneficiario, la solvencia de este último se ve amenazada en importante nivel, de manera que pone en riesgo sus condiciones dignas de vida. Esto es, una persona es dependiente cuando no cuenta con

grados suficientes de autonomía económica y su nivel de vida digna y decorosa está subordinada a los recursos provenientes del que fallece.

En ese sentido, aunque no debe ser total y absoluta, en todo caso, debe existir un grado cierto de dependencia, que la Corte ha identificado a partir de dos condiciones: i) una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; ii) y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo (Ver sentencias CSJ SL4811-2014, CSJ SL14923-2014, SL6390-2016, SL2490-2019 y SL1527-2020).

Por ello, no es relevante en estos asuntos conocer el origen de los ingresos del causante o la destinación que se realice de su aporte al núcleo familiar, en la medida que estas situaciones en nada desdibujan o confirman la existencia de una subordinación económica (Ver SL165-2018).

Ahora bien, en cuanto a los medios de convicción que pueden utilizarse para acreditar la dependencia en comento, es relevante traer a colación el art. 51 del CPTSS, según el cual en materia laboral *“Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley”*, mismos que deben ser analizados sin una tarifa legal, pues el juez es quien forma libremente su convencimiento, a voces del art. 61 ibídem. Para esta Sala de decisión, en casos como el presente no se exige de manera estricta ventilar circunstancias propias de la vida privada del núcleo familiar, basta con verificar la existencia de una contribución económica de parte del hijo, en forma cierta, periódica y significativa (Ver SL 5292 de 2018).

Con base en las anteriores precisiones, se analiza el *sub lite*, encontrando que la dependencia económica respecto de Paula Marín se logra vislumbrar, de su madre Luz Marina.

En la declaración de parte realizada por la señora Rubiela Buitrago (min 20:00) indicó que no recuerda a cuanto ascendían los gastos del hogar para el año 2016, pero recuerda que su hija Paula le pasaba dinero para sus bastos personales, tales como vestido, salud y recreación, que más o menos le daba \$350.000. Que ella nunca ha trabajado, pues siempre se dedicó a ser ama de casa, que su esposo era pensionado, siempre veló por el hogar y después de que Paula falleció fue él quien asumió lo que faltaba por la ausencia del aporte de Paula.

Por su parte, las testigos MARIA EUGENIA BUITRAGO (min. 33:50, hermana de la demandante) dijo que su hermana siempre ha sido ama de casa, que duró casada más o menos 41 años con el esposo hasta que falleció, le consta que Paula vivió con sus padres en los últimos años de vida después de su divorcio y les aportaba para los gastos de la casa, especialmente para los gastos de la madre, destinando para ella más o menos \$350.000. Que los ingresos de Paula provenían de trabajo como independiente vendiendo bisutería que ella misma hacía y con la cual le iba muy bien.

La testigo ELIZABETH MARÍN BUITRAGO (min. 59 –hija de la demandante), manifestó que los padres duraron 40 años casados hasta que el papá falleció, que siempre fue muy buen padre y esposo y era quien se encargaba de los gastos del hogar, que su hermana Paula se suicidó, tenía trastorno de bipolaridad, que para la fecha en que se suicidó vivía desde hacía algunos años con sus padres, ya que volvió a la casa después del divorcio, que ella trabajaba vendiendo accesorios y tenía una marca propia que registro de nombre paopao, que ayudaba con los gastos del hogar porque desde el principio que se pasó en eso quedaron, sabe que aportaba más o menos \$350.000 para los gastos de su madre, puesto que ella era quien le pagaba la medicina propagada a la mamá.

Como pruebas documentales dentro del expediente, se tiene que en la recepción de información por parte de Protección se indica que la madre recibía dinero para

los servicios y gastos personales por parte de su hija (pág. 112). Que el señor ÓSCAR, padre de la causante, en esa oportunidad manifestó que la hija pagaba los servicios de la casa y se encargaba de los gastos de la madre (pág. 113). En la investigación administrativa realizada por Allianz, la señora Rubiela manifestó que su hija le daba 600.000 de los cuales destinaba para los servicios de la casa y gastos personales, que a la fecha de la investigación esos gastos los asumía con la pensión del esposo. (pág. 121). Y dentro de la conclusión que da Allianz indica que la afiliada era soltera, no tenía hijos. Vivía con sus padres y ayudaba a sus padres con algunos gastos de la casa (pág. 124).

Analizado en su conjunto el anterior elenco probatorio, al igual que la conclusión arribada por el A quo, para la Sala es clara la dependencia económica de la demandante respecto de su hija fallecida, pues el beneficio del aporte económico por parte de este no puede determinarse en proporción a su contribución, sino en la utilidad que el mismo en mayor o menor medida le representaba al núcleo familiar, y del cual hacía parte la aquí demandante. Nótese que la demandante en su interrogatorio manifiesta que, indicó que los rubros dados por su hija también eran destinados para solventar sus gastos personales, de transporte y medicamentos, necesidades estas que, por su esencia, suplirlas en mayor o menos proporción por los aportes de uno de los contribuyentes, son de vital importancia al carácter decoroso de una vida digna, siendo de esta manera la contribución dada por la finada relevante, esencial y preponderante, ya que cumplía con el objetivo de ayudar a mantener unas condiciones de vida determinadas a su madre.

Argumentos estos que resultan suficientes para descartar la oposición de la demandada y en su lugar acoger las pretensiones y confirmar la decisión de primera instancia.

Que el a quo reconoció la mesada pensional en cuantía de 1 SMMLV y sobre ello no existió oposición, pasa la Sala a actualizar el valor del retroactivo así:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2016	5,75%	3+22 días	\$ 689.454	\$ 2.573.962
2017	4,09%	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	3,18%	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	3,80%	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	1,61%	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	5,62%	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022		9	\$ 1.000.000	\$ 9.000.000
			TOTAL	\$ 65.308.214

A partir del 1° de octubre de 2022, la accionada seguirá reconociendo pensión de sobrevivientes a la demandante en cuantía de 1 SMMLV a razón de 13 mesadas anuales.

Se autoriza a Protección a realizar los descuentos en salud del retroactivo aquí calculado y de las mesadas que en adelante se sigan causando.

Sobre la **acusación de los intereses de mora**, señala la Sala que en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los mismos se reconocen en los eventos de retraso en el pago de las mesadas pensionales, iniciando su cómputo, una vez vencido el término de que trata el artículo 1° de la Ley 717 de 2001, que se concede a la entidad administradora de pensiones para pronunciarse sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y el cual es de 2 meses.

En este punto, ha de ordenarse el reconocimiento y pago de los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que PROTECCIÓN negó la prestación argumentando que, para el momento del fallecimiento de Paula Marín Buitrago, la demandante no acreditó la dependencia económica, cuando de la

investigación administrativa realizada por la aseguradora se puede llegar a una conclusión diferente.

De esta manera, quedan resueltos los aspectos materia de impugnación.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y en favor de la señora RUBIELA BUITRAGO JARAMILLO, se fijan en la suma de 2 SMMLV.

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **Confirma**, en su totalidad la sentencia emitida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín y actualiza el retroactivo. A partir del 1° de octubre de 2022 la mesada pensional de la demandante será en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, a razón de 13 mesadas anuales.

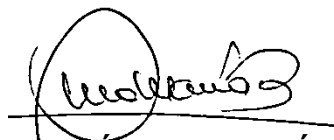
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL


EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado:	05001-31-05-012-2017-01148-01
Demandante:	RUBIELA BUITRAGO JARAMILLO
Demandado:	PROTECCIÓN S.A.
Decisión:	CONFIRMA Y ACTUALIZA CONDENA
Magistrado ponente:	DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 24 de octubre 2022 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto


RUBÉN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO